

Agosto 2007

TEXTOS SELECCIONADOS DE

RALF DAHRENDORF

Sociólogo, politólogo y economista, Ralf Dahrendorf nació en Hamburgo (Alemania) en 1929. Se licenció en Filosofía, Filología Clásica y Sociología en la Universidad de Hamburgo y en 1952 se doctoró en Filosofía y Estudios Clásicos en la misma Universidad. Entre 1953 y 1954 realizó un postgrado en la London School of Economics. Fue profesor de Sociología en las Universidades de Hamburgo (1957-1960), Tubinga (1960-1964) y Constanza (1966-1969). En 1969 fue elegido diputado al Parlamento alemán por el Partido Democrático Libre, una formación política de corte liberal, y tomó parte en el primer gobierno de Willy Brandt como secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1970 fue nombrado Comisario Comunitario en Bruselas. Asimismo continuó con su carrera académica, ocupando los cargos de director de la London School of Economics (1974-1984) y decano en el St. Anthony's College, un centro de postgrado orientado a los estudios internacionales en la Universidad de Oxford. En 1988 adoptó la nacionalidad británica y en 1993 fue nombrado Lord por la Reina Isabel II, con el título de Barón Dahrendorf of Clare Market in the City of Westminster. Desde entonces, forma parte de la Cámara de los Lores británica como un crossbench, miembro no adscrito a ningún partido político. Desde 2005 es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Berlín.

Entre sus estudios destacan sus aportaciones a las teorías del conflicto social, que abordan cuestiones como la necesidad de integración y orden en las sociedades contemporáneas, a la vez que defiende el concepto de conflicto como factor de cambio social. Asimismo, ha insistido en la necesidad de que Europa se enfrente a los problemas que se le plantean, como el mantenimiento del Estado del bienestar o el desempleo. Ralf Dahrendorf es autor de una extensa obra escrita. Entre sus títulos se encuentran *Clases y conflictos de clases en la sociedad industrial* (1959), *En defensa de la Unión Europea* (1976), *El nuevo liberalismo* (1982), *Ley y orden* (1994), *El hilo de la razón* (1998), *Después de la democracia* (2002), *En busca de un nuevo orden* (2005) y *El recomienzo de la historia. De la caída del muro a la guerra de Irak* (2007).

Ha recibido más de una veintena de doctorados honoris causa de universidades del Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Italia y Estados Unidos, entre otros.

La solución es más trabajo

Ralph Dahrendorf

En las sociedades globalizadas, el trabajo ya no funciona como herramienta de control social y esto abre un vacío peligroso. Para Dahrendorf, se trata de evitar, a toda costa, caer en el asistencialismo.

Hay suficientes actividades para todos. En ese sentido nunca se nos acabará el trabajo. Incluso hay suficiente trabajo pago para todos si los salarios en principio pueden bajar y se encuentra a alguien que los pague. ¿Pero por qué la gente tendría que pagar por el trabajo de otros? Aquí nos encontramos con la primera de las dos grandes transformaciones del mercado laboral que han modificado las viejas sociedades del trabajo. La clase global se las arregla sin el trabajo de muchos. Tendrá muchos ayudantes de ayudantes, algunos de ellos sin formación y con bajas remuneraciones, pero parte considerable del 40% sin estudios no es necesaria para el resto. Eso es nuevo. Los capitalistas clásicos necesitaban el trabajo para utilizar sus fuerzas productivas. En definitiva, John Keynes pudo incluso inventar el control consciente de la demanda para reincorporar a los desocupados al trabajo y de ese modo mantener el capitalismo en marcha. El capital y el trabajo estaban fatalmente conectados, como lo describió Marx en términos tajantes. El capital habrá tenido el poder, pero el trabajo no carecía de efecto palanca. Pero la clase global en ascensor no necesita todo el trabajo que está en principio disponible. Necesita computadoras, pero no obreros. (Si escribiera un libro sobre esta clase y los nuevos conflictos, su título sería *“El capital sin trabajo”*). Por eso el trabajo que se les consigue a muchos tiene algo de irrelevante, casi de superfluo. En eso es elocuente la experiencia del New Labour con el llamado New Deal. El programa debía proporcionar educación o una actividad en servicios voluntarios o un puesto de trabajo para cien mil jóvenes. Fue un programa caro que generó poco trabajo a altos costos. A algunos la educación les sirvió para salir de la sensación de inutilidad, aunque muchos interrumpieron la formación antes de tiempo por no ver una luz al final del túnel. Los socialmente excluidos no se toman en serio las actividades voluntarias. Por el contrario, son los que tienen buena formación y éxito, como hemos visto, quienes participan activamente en la vida de la sociedad civil.

¿Y por qué entonces la preocupación por todos aquellos que evidentemente no son necesarios? La sociedad del trabajo desarrolló una detallada ideología del valor del trabajo. La ocupación le permite al ser humano no sólo ganarse la vida, sino que también es la clave de acceso a sus derechos y por ende al Estado de bienestar; además, hace que la gente sienta respeto por sí misma e incluso le da sentido a su vida. Pero para que eso suceda el trabajo en sí tiene que tener un cierto sentido. Por lo menos tiene que parecerle importante a quien lo hace. Esto se ha convertido en un verdadero problema para muchos de los que están afuera de la nueva economía. Cambian de trabajo con frecuencia no porque se los emplee por poco tiempo y se los despida rápidamente, sino porque los trabajos a los que tienen acceso no tienen mucha importancia. Mientras la clase global se divierte con Internet, se cuelga del teléfono y así llena además sus cuentas bancarias, otros viven una vida que no buscaron, una “vida de portafolio” de trabajos ocasionales, delitos ocasionales y diversiones ocasionales. La sociedad del trabajo, que mantiene la cohesión del conjunto exceptuando a una reducida clase ociosa en la cima y el lumpenproletariado en el otro extremo, se ha desintegrado.

Es posible que la consecuencia más seria sea la pérdida de un aspecto de la ocupación que hasta ahora no mencionamos: el trabajo como instrumento de control social. La necesidad de trabajar es uno de los métodos más efectivos para mantener a la gente en el buen camino; eso ocurría tanto en las sociedades industriales como en otras anteriores: el trabajo estructuraba el tiempo sin que los poderes que estaban detrás del proceso fueran siempre visibles. Había que trabajar para vivir y trabajar significaba ir a la fábrica o la oficina por la mañana, volver al anochecer, tener vacaciones de vez en cuando, enfermarse a veces, retirarse al final con una merecida jubilación. Por razones relacionadas con el éxito de las estrategias para reducir el trabajo normal –pero también con la falta de trabajo normal para casi la mitad de la población en edad de trabajar, debido a la dulce tentación de la dependencia del Estado de bienestar, el surgimiento de nuevas formas de dependencia y una tendencia general a disolver las jerarquías definidas por el trabajo–, el control social por medio del tiempo estructurado por el trabajo se debilitó para muchos y para otros desapareció por completo.

Es posible que el debilitamiento del control social sea el mayor problema específico del mundo moderno. También es su tema permanente. Primero perdieron poder las iglesias, luego la familia, la comuna, la nación. En todas partes las sociedades recorrieron el camino desde los vínculos estamentales hasta los contractuales. El contrato de trabajo terminó siendo casi el único método que quedaba para estructurar la vida de la gente. En la medida en que eso ya no es la regla, y para la mayoría ya no es una experiencia de vida, se abre un vacío peligroso. Las bases morales de la sociedad se desintegran. No es un milagro que la cohesión social se haya vuelto un tema político, y con ella el lenguaje de la solidaridad y la comunidad. ¿Nos ayudará esa tematización a resolver las cuestiones de ley y orden que para muchos están tan arriba en la lista de prioridades?

La clase global tiene sus propios recursos y sus vías para garantizar la seguridad personal de sus miembros, pero también quiere tener sociedades cohesionadas. El comunitarismo solo no va a lograrlo, y tampoco el fortalecimiento del sector voluntario de organizaciones no gubernamentales, y es precisamente por eso que el trabajo para todos se ha convertido en un tema tan desesperadamente importante. El trabajo para todos es necesario sobre todo como instrumento de control social, ¿pero qué ocurre si la gente no quiere el trabajo disponible porque sabe bien que en realidad no se la necesita? En ese caso hay que obligarla a trabajar. Hay que recortar las prestaciones sociales para todos los que no trabajan, aunque sean madres solteras. Hay que combatir el fraude social con todo rigor, aunque tenga proporciones muy modestas. Si la gente se refugia en el delito, entra en juego la política de Tony Blair: “duro con el delito, duro con las causas del delito”. Eso significa en primer lugar castigar con dureza los delitos. Por lo que toca a las causas, el trabajo parece ser la única respuesta, o en todo caso la predilecta.

Publicado en nro. 179 el 3 de marzo de 2007, suplemento cultural del diario Clarín (Argentina). Reproducido en el semanario Peripeccias N° 46 el 2 de mayo de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.

Ralf Dahrendorf: Desigualdad y descontento

En los dos últimos decenios, el mundo en conjunto se ha hecho más rico, pero, mientras algunas economías nacionales han avanzado enormemente, otras han quedado muy rezagadas. El aumento de la riqueza total no ha propiciado la abolición - ni la reducción siquiera- de la pobreza.

Lo mismo se puede decir en gran medida de lo sucedido dentro de los países. En casi todas partes, la mundialización ha producido a un tiempo una nueva clase de multimillonarios y una clase marginada compuesta de personas que no sólo son pobres en el sentido estadístico de ganar menos de la mitad de la media nacional, sino que, además, están excluidos de las oportunidades que en teoría están al alcance de todos. El dinamismo de la mundialización ha beneficiado a muchos, pero también ha aumentado la desigualdad.

¿Es eso necesariamente malo? Muchos piensan que sí. En realidad, países enteros tienen una predisposición igualitaria intrínseca. Les desagradan los dirigentes empresariales que se llevan a casa sumas enormes incluso cuando fracasan y detestan ver entre ellos a pobres y excluidos. Pero, si bien es cómodo vivir en el mundo socialdemócrata de Escandinavia, Alemania y otros países europeos, muchos de ellos han adquirido su igualdad a crédito con cargo a generaciones futuras. Además, una atmósfera igualitaria no fomenta la innovación y la sensación de desarrollo dinámico. Las personas creativas suelen abandonar las sociedades en las que existe una intensa presión para no ser diferente. La desigualdad no sólo es compatible con la libertad, sino que a menudo es consecuencia de ella y la estimula.

Entonces, ¿debemos elegir entre libertad e igualdad? Las cosas no son tan simples. Una sociedad libre reconoce dos límites a la desigualdad económica y general. Los dos plantean cuestiones prácticas difíciles, aunque son claras en principio.

La desigualdad es incompatible con la libertad si limita las posibilidades de participación de las personas en la comunidad política, en el mercado y en la sociedad civil. En el extremo más bajo de la escala social, se plantea la antigua y enojosa cuestión de la igualdad de oportunidades. Lo que está claro es que todo el mundo debe tener acceso a las elecciones y a los partidos políticos, a la educación y al mercado laboral y a las asociaciones de la sociedad civil.

En una palabra, la ciudadanía, en el sentido pleno de la palabra, requiere derechos básicos y la capacidad para hacer cumplirlos. También requiere un situación económica básica, incluida una garantía de ingresos, que se puede facilitar de diversas formas.

Una cuestión difícil es la de dónde exactamente trazar la línea que determina la situación básica a la que todos los ciudadanos tienen derecho. En la mayoría de los países, debería estar probablemente más alta que ahora. Otra cuestión difícil es la de cómo se debe garantizar la situación básica. El debate sobre los complementos de ingresos particulares frente a los servicios públicos generales se ha intensificado en todas partes. Puede resolverse perfectamente con diferentes medidas ajustadas a las tradiciones de los diferentes países, si bien las bonificaciones fiscales y complementos

similares de los ingresos de las personas son más compatibles con las sociedades libres.

En el extremo superior de la escala económica y social, se plantea una cuestión diferente. Muchas personas se oponen a que los directivos empresariales reciban en sueldos, primas y opciones sobre acciones millones de dólares de sus empresas. De hecho, es legítimo preguntarse si el comportamiento de los capitalistas actuales fomenta la aceptación general del capitalismo, pero la riqueza individual sólo resulta ser un problema si se puede utilizar - y cuando así sea- para limitar las posibilidades de participación de los demás. Cuando la riqueza se vuelve un poder ilimitado, hay que hacer algo para limitarla. Lo que ha llegado a llamarse blanqueo de dinero, es decir, el intento de convertir beneficios ilícitos en riquezas legítimas, constituye un ejemplo de la necesidad de adopción de medidas. Hay otros, incluida la cuestión de los impuestos de sucesiones, que están considerados desde hace mucho componentes necesarios de una sociedad libre.

No obstante, si bien una sociedad libre reconoce límites a la desigualdad, también acepta la existencia de desigualdad, pues infunde esperanzas a muchos al mostrar lo que se puede alcanzar con capacidad y suerte... o incluso tal vez sólo con suerte. La desigualdad aporta colorido y variedad a las sociedades; es una de las características de los países innovadores, flexibles y llenos de vitalidad. Así pues, no es mala en sí, si bien se deben limitar sus excesos en nombre de la ciudadanía para todos.

La exclusión social y el poder personalizado mediante la riqueza son siempre inaceptables, pero, si queremos libertad, las desigualdades económicas y sociales son un precio legítimo y necesario que debemos pagar.

Ralf Dahrendorf, miembro de la Cámara de los Lores, ex comisario europeo de Alemania y ex rector de la London School of Economics

La Vanguardia, 12/02/06

9/11 and the New Authoritarianism

Ralf Dahrendorf

Five years after the attacks on the Twin Towers in New York and the Pentagon in Washington, “9/11” is no longer a mere date. It has entered the history books as the beginning of something new, a new era perhaps, but in any case a time of change. The terrorist bombings in Madrid and London and elsewhere will also be remembered; but it is “9/11” that has become the catchphrase, almost like “August 1914.”

But was it really a war that started on September 11, 2001? Not all are happy about this American notion. During the heyday of Irish terrorism in the UK, successive British governments went out of their way not to concede to the IRA the notion that a war was being waged. “War” would have meant acceptance of the terrorists as legitimate enemies, in a sense as equals in a bloody contest for which there are accepted rules of engagement.

This is neither a correct description nor a useful terminology for terrorist acts, which are more correctly described as criminal. By calling them war – and naming an opponent, usually al-Qaeda and its leader, Osama bin Laden – the United States government has justified domestic changes that, before the 9/11 attacks, would have been unacceptable in any free country.

Most of these changes were embodied in the so-called “USA Patriot Act.” Though some of the changes simply involved administrative regulations, the Patriot Act’s overall effect was to erode the great pillars of liberty, such as *habeas corpus*, the right to recourse to an independent court whenever the state deprives an individual of his freedom. From an early date, the prison camp at Guantánamo Bay in Cuba became the symbol of something unheard of: the arrest without trial of “illegal combatants” who are deprived of all human rights.

The world now wonders how many more of these non-human humans are there in how many places. For everyone else, a kind of state of emergency was proclaimed that has allowed state interference in essential civil rights. Controls at borders have become an ordeal for many, and police persecution now burdens quite a few. A climate of fear has made life hard for anyone who looks suspicious or acts suspiciously, notably for Muslims.

Such restrictions on freedom did not meet with much public opposition when they were adopted. On the contrary, by and large it was the critics, not the supporters, of these measures who found themselves in trouble. In Britain, where Prime Minister Tony Blair supported the US attitude entirely, the government introduced similar measures and even offered a new theory. Blair was the first to argue that security is the first freedom. In other words, liberty is not the right of individuals to define their own lives, but the right of the state to restrict individual freedom in the name of a security that only the state can define. This is the beginning of a new authoritarianism.

The problem exists in all countries affected by the threat of terrorism, though in many it has not become quite as specific. In most countries of continental Europe, “9/11” has remained an American date. There is even a debate – and indeed some evidence – concerning the question of whether involvement in the “war against terrorism” has

actually increased the threat of terrorist acts. Germans certainly use this argument to stay out of the action wherever possible.

This stance, however, has not prevented the spread of something for which a German word is used in other languages, too: *Angst*. A diffuse anxiety is gaining ground. People feel uneasy and worried, especially when traveling. Any train accident or airplane crash is now at first suspected of being an act of terrorism.

Thus, 9/11 has meant, directly or indirectly, a great shock, both psychologically and to our political systems. While terrorism is fought in the name of democracy, the fight has in fact led to a distinct weakening of democracy, owing to official legislation and popular angst. One of the worrying features of the 9/11 attacks is that it is hard to see their purpose beyond the perpetrators' resentment of the West and its ways. But the West's key features, democracy and the rule of law, have taken a far more severe battering at the hands of their defenders than by their attackers.

Two steps, above all, are needed to restore confidence in liberty within the democracies affected by the legacy of 9/11. First, we must make certain that the relevant legislation to meet the challenge of terrorism is strictly temporary. Some of today's restrictions on *habeas corpus* and civil liberties have sunset clauses restricting their validity; all such rules should be re-examined by parliaments regularly.

Second, and more importantly, our leaders must seek to calm, rather than exploit, public anxiety. The terrorists with whom we are currently at "war" cannot win, because their dark vision will never gain broad popular legitimacy. That is all the more reason for democrats to stand tall in defending our values – first and foremost by acting in accordance with them.

El extraño documento que surgió de las largas reuniones de la Conferencia Intergubernamental de estados miembros de la Unión Europea técnicamente no es una constitución. Por ejemplo, en ningún lugar dice “Nosotros, los pueblos de Europa...”. Más bien, el documento es simplemente un Tratado por el que se instituye una Constitución de Europa acordado por Altas Partes Contratantes, es decir, gobiernos nacionales. Deberá ser ratificado por los parlamentos de cada país, en algunos casos mediante referéndum, y sólo puede ser enmendado en conferencias intergubernamentales, no por el Parlamento europeo, y menos aún por el (inexistente) pueblo de Europa.

El Tratado es particularmente ambiguo cuando utiliza un lenguaje constitucional. La llamada “Carta de Derechos Fundamentales”, por caso, en apariencia protege las libertades civiles. De hecho, sólo se aplica a actos de las instituciones de la Unión Europea. “Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión respetando el principio de subsidiariedad, así como a los estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión” (capítulo VII artículo 51-1). Cuando se garantizan derechos específicos se añade la siguiente cláusula: “según las leyes nacionales que regulen su ejercicio”.

Igualmente, al describir las instituciones de la UE, el Tratado esencialmente resume el derecho existente. Algunas disposiciones nuevas -como el peso de los votos nacionales en los Consejos de la Unión- se han discutido y seguirán discutiéndose ampliamente. Disposiciones como las que establecen una Comisión de 25 -y tal vez pronto de 30 miembros- probablemente se modificarán dentro de poco tiempo porque sencillamente no son viables. En cualquier caso, es seguro que el texto actual del Tratado no durará más de dos siglos (como la Constitución de Estados Unidos), o siquiera dos décadas.

Entonces, ¿por qué tantos políticos inteligentes están armando tal alharaca? Es necesario darse cuenta de que en Europa cuentan tanto los actos simbólicos como las realidades tangibles. Por eso posee esa curiosa característica de que a veces es visible y a veces no. El primer ministro británico, Tony Blair, dijo durante mucho tiempo que el Tratado era simplemente un ejercicio para poner orden y que por lo tanto no había que tomarlo muy en serio. Cuando el debate simbólico se le vino encima cambió completamente de táctica.

En efecto, para sorpresa de casi todo el mundo, ahora promete realizar un referéndum sobre el Tratado y afirma que así se decidirá de una vez por todas si Inglaterra está dentro o fuera de la Unión. Un debate similar se está dando en Suecia.

En otros lugares, sobre todo en Francia y Alemania, se han hecho afirmaciones tan contundentes a favor de la llamada Constitución que los pocos que realmente han leído el borrador se han de preguntar por qué sus 125 densas, si no es que oscuras, páginas habrán de salvar a Europa.

Charles Grant, director del Centro para la Reforma Europea de Inglaterra, ha especulado sobre lo que sucedería si ese país “vota por el no”. Sostiene que si sólo se tratara de Inglaterra ciertamente

habría presión para que el país repitiera la votación (como sucedió en Dinamarca en 1992 e Irlanda en el 2001), o para que se retirara de la Unión y adoptara una especie de estatus de asociado. Si otros países, y no sólo los pequeños, también votan por el no, habrá una tendencia (según Grant), sobre todo en Francia y Alemania, a “avanzar con un núcleo europeo”.

Escaso entusiasmo

Pero hay que preguntar qué haría ese núcleo europeo. En particular, cómo se enfrentarían los gobiernos de cualquier núcleo europeo al hecho de que, como lo demostraron las elecciones europeas de principios de junio, sus propios pueblos distan de estar entusiasmados con la Unión.

Todo esto sugiere conclusiones que dan qué pensar. Parece que ante la falta de proyectos sustantivos de política, la Unión Europea se ha encerrado en sí misma y ha producido un documento que pretende ser mucho más de lo que es en realidad. Cuando se le presenta la oportunidad de opinar, la gente expresa dudas considerables, como lo hizo en las recientes elecciones europeas. En efecto, mientras más vieja y arraigada está la democracia en los países europeos, más escépticos se muestran sus ciudadanos frente a las pretensiones del tratado constitucional. Así, la brecha entre la imagen de Europa y la realidad de la UE se está ampliando.

¿Qué hacer si uno cree en la Europa real y sus metas comunes? El primer requisito es bajarle la temperatura al debate sobre el Tratado. No se deben hacer afirmaciones sin fundamento en su favor. La Europa ampliada puede sobrevivir sin él.

El segundo requisito es darle mayor importancia a la Europa real. El mercado único está lejos de completarse. Hay asuntos muy importantes sin resolver en los alrededores inmediatos de la Unión ampliada, en Europa del Este y en los Balcanes. En resumen, el orden del día debería incluir menos las preocupaciones abstractas sobre la identidad de Europa y más las acciones prácticas para definirla en hechos, no en símbolos.

Ralf Dahrendorf.

Artículo publicado en el diario “La Vanguardia de Barcelona” el 20 de julio de 2004.

Democracia sin demócratas

Ralf Dahrendorf

El filósofo Karl Popper tenía buenas razones para proponer una definición precisa del concepto "democracia". La democracia, decía, es un modo de sacar a quienes están en el poder sin derramamiento de sangre. El método preferido de Popper era, por supuesto, depositar los votos en las urnas.

La definición de Popper evita disputas teológicas acerca del "gobierno del pueblo" y si una cosa así puede existir realmente. También permite ahorrarnos el intento de pegar en la definición toda clase de objetivos deseables, como la igualdad en términos sociales y técnicos, una teoría general del proceso efectivo de la "democratización", o incluso un conjunto de virtudes cívicas relacionadas con la participación.

Pero la definición que Popper da de la democracia no es útil cuando se plantea una pregunta que se ha convertido en tema recurrente en varias partes del mundo: ¿qué pasa si quienes salen del poder creen en la democracia, mientras que quienes los reemplazan no? En otras palabras, ¿qué pasa si la gente "errada" resulta electa?

No faltan ejemplos. En Europa, partidos de dudosos antecedentes democráticos han tenido buenos resultados en los últimos años: Jörg Haider en Austria, Christoph Blocher en Suiza, Umberto Bossi en Italia, Jean-Marie LePen en Francia... la lista es larga. En el mejor de los casos, las victorias electorales de estos grupos hacen difícil la formación de gobiernos responsables; en el peor de los casos, son el prelude de movimientos activamente antidemocráticos capaces de obtener una mayoría en las elecciones.

Esto es lo que ha ocurrido o está ocurriendo en varias partes del mundo. Hay dos ejemplos recientes que destacan. Uno se encuentra en los países poscomunistas de Europa del este y del sudeste, de los cuales una sorprendente cantidad ha elegido a miembros de la vieja *nomenklatura* bajo una nueva apariencia.

El caso más extremo es Serbia, donde una gran parte del electorado dio sus votos a hombres con juicios pendientes en La Haya por crímenes de guerra. El otro ejemplo es Irak. ¿Qué pasa si el sueño americano de llevar la democracia a ese aporreado país termina en una situación en que los ciudadanos eligen que los gobierne un movimiento fundamentalista?

El solo pensar en ejemplos como estos nos lleva a la clara conclusión de que la democracia no se trata meramente de elecciones. De hecho, por supuesto, los primeros partidarios de la democracia tenían todo tipo de cosas en mente. Por ejemplo, John Stuart Mill consideraba la "nacionalidad", una sociedad cohesiva dentro de fronteras nacionales, como una precondition para la democracia.

Otra precondition para Mill era la capacidad y el deseo de los ciudadanos de elegir de manera informada y ponderada. Hoy ya no damos por hecho la existencia de tales virtudes. Probablemente eran ejercidas por una minoría, incluso en la época en que Mill escribió acerca del gobierno representativo.

Hoy la democracia tiene que significar "democracia más algo", pero ¿qué es ese algo? Hay algunas medidas técnicas que se pueden tomar, como prohibir a los partidos y

candidatos que hacen campaña contra la democracia, o cuyos antecedentes democráticos sean insuficientes.

Esto funcionó en la Alemania de posguerra, pero en ese caso fue con la ayuda de los traumáticos recuerdos del nazismo y la relativa debilidad de los movimientos antidemocráticos. Un ejemplo más relevante bien puede ser Turquía, en donde los movimientos islamistas fueron disueltos por las cortes y, cuando reaparecieron con otro disfraz, tuvieron que pasar por severas pruebas.

Sin embargo, es fácil ver los problemas: ¿quién juzga la idoneidad de los candidatos y cómo se hacen cumplir tales juicios? ¿Que ocurre si la base de apoyo de un movimiento antidemocrático es tan fuerte que la supresión de su organización genera violencia?

En cierto sentido, sería mejor dejar que tales movimientos lleguen al gobierno y esperar que fracasen, como ha ocurrido con la mayoría de los actuales grupos europeos de raigrambre antidemocrática. Pero eso es demasiado riesgoso. Cuando Hitler llegó al poder en enero de 1933, muchos (si no todos) los demócratas alemanes pensaron: "¡Dejémosle hacer! Pronto quedará al descubierto por lo que es y, sobre todo, por lo que no es". Pero el tiempo es relativo: "pronto" llegó a significar doce años que incluyeron una guerra salvaje y el Holocausto.

Por tanto, los ciudadanos activos que defienden el orden liberal deben ser su salvaguarda. Pero hay otro y más importante elemento que proteger, el imperio de la ley.

Imperio de la ley no es lo mismo que democracia, ni son elementos que necesariamente se garanticen mutuamente. El imperio de la ley es la aceptación de que las leyes dictadas no por alguna autoridad suprema, sino por la ciudadanía, rigen para todos: quienes están en el poder, los que están en la oposición y quienes están fuera del juego del poder.

El imperio de la ley es la característica más sólida de Turquía en la actualidad. Con razón ha sido el principal objetivo del Alto Representante para Bosnia, Paddy Ashdown. Es algo que se debe defender; las así llamadas "leyes de excepción" que suspenden el imperio de la ley son la primera arma de los dictadores. Pero es más difícil usar el imperio de la ley para socavar la ley que usar las elecciones populares contra la democracia.

"Elecciones más algo" significa, por lo tanto, democracia más imperio de la ley. A riesgo de ofender a varios amigos que son demócratas convencidos, he llegado a la conclusión de que el imperio de la ley viene primero cuando un país anteriormente regido por una dictadura se dota de una constitución y la obedece, y después viene la democracia. Los jueces independientes e incorruptos son aún más influyentes que los políticos elegidos con grandes mayorías. ¡Afortunados los países que poseen ambas autoridades, y que las estimulan y protegen!

Copyright: Project Syndicate/Institute for Human Sciences, enero de 2004.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

¿Democracia a cañonazos?

Ralf Dahrendorf, 26-XI-2004.

En cierto sentido, las armas de destrucción en gran escala de Iraq fueron también armas de distracción en gran escala. No cabe duda de que, cuando el presidente George W. Bush y el primer ministro Tony Blair se decidieron por una guerra preventiva, estaban convencidos de que Saddam Hussein tenía esa clase de armas o los medios para producirlas. En el caso de Iraq, existía miedo en particular a las armas químicas y biológicas.

Pero las armas de destrucción en gran escala no fueron el único motivo para la guerra. Los dos dirigentes sentían indignación ante un dictador asesino y esperaban que su derrocamiento abriría la puerta a la democracia en Iraq. Con ello (esperaban) se lograría automáticamente un grado de estabilidad que contribuiría a resolver otros conflictos en la región y también garantizaría un suministro ininterrumpido de petróleo.

Los motivos ambivalentes no son necesariamente malos motivos. De hecho, la mayoría de motivos humanos son ambivalentes. La verdadera cuestión es la de si la democracia podría haber funcionado y, además, si los cohetes y los tanques son el método idóneo para llevar la democracia a un país que ha sufrido un gobierno dictatorial durante un largo período de tiempo.

Los precedentes históricos desempeñaron un papel en la decisión sobre Iraq, entre otras cosas porque la asesora de Seguridad nacional de Bush, Condoleezza Rice, los citó con frecuencia. Un ejemplo es la Alemania nazi. Desde luego, los aliados no entraron en aquella guerra para llevar la democracia a Alemania. En cualquier caso, fue Alemania la que inició la guerra. Los aliados defendieron a aquellos para con los que estaban obligados por tratados y, además, la integridad de sus países.

Tal vez la entrada de Estados Unidos en la guerra (europea) tuviera algo que ver con el orden de la posguerra, pero, en realidad, había dos opiniones sobre dicho orden. Una era la de que había que aplastar a Alemania y reducirla a una sociedad preindustrial en la que no pudiera surgir de nuevo agresión eficaz alguna. La otra era la de que se debía ayudar a Alemania a seguir la vía de la democracia.

Ocurrió que los partidarios de la primera opinión quedaron marginados y se impusieron los de la democratización. De hecho, Estados Unidos fue eficaz al utilizar su poder blando para crear la democracia en la Alemania de la posguerra, si bien Gran Bretaña lo fue más. Los modales democráticos resultaban más naturales en las fuerzas británicas de ocupación.

El segundo ejemplo, el fin de la guerra fría en 1989, fue también el de un éxito. Naturalmente, el desplome del comunismo no fue consecuencia de un ataque preventivo de Occidente (aunque la carrera de armamentos contribuyó a provocar la implosión del sistema). Sin embargo, después de 1989 la asistencia occidental, en particular la de Estados Unidos y Gran Bretaña, facilitó la transición a la democracia, el Estado de derecho y las economías de mercado en la mayoría de los países poscomunistas.

Así, pues, ¿por qué no parece funcionar eso mismo en Iraq? Evidentemente, abundan las diferencias de cultura y de circunstancias. Aún así, ¿por qué ha dado tan pocos resultados la intención por parte de los dirigentes de la guerra en Iraq de brindar una oportunidad a la democracia en ese país?

Una razón es la de que llevar la democracia con cohetes y tanques es casi una contradicción. La democracia es por definición un método pacífico de solución de conflictos. Naturalmente, el bombardeo de Dresde en 1945 no fue precisamente pacífico. Podemos poner en duda que contribuyera lo más mínimo a hacer la democracia más aceptable después de la Segunda Guerra Mundial. Aún así, cuando acabaron los combates, se puso fin a los bombardeos definitivamente y de los tanques salieron personas decididas a crear las condiciones democráticas y aptas para hacerlo.

Estos días se habla mucho de poder duro y blando, de que Estados Unidos tiene uno y Europa el otro. En realidad, los dos van unidos. El poder blando sin el respaldo del poder duro poco cambia: lo atestigua Irán. Por otra parte, el poder duro sin el poder blando significa sólo destrucción. La mayor deficiencia de las fuerzas de Estados Unidos es la de en el 2004 –a diferencia de lo que sucedió en 1945- no tiene capacidad para poner fin a los bombardeos, salir de los tanques y alentar el desarrollo democrático autóctono desde abajo.

En los casos en que existe esa capacidad, ha de haber también el reconocimiento de que la democracia no entraña las mismas instituciones en todos los marcos culturales. Si se celebran elecciones en Iraq en enero –y es mucho suponer-, puede que no resuelvan gran cosa. Para conseguir la participación de la gente y brindar una resolución pacífica al conflicto, pueden hacer falta instituciones propias de la región y de su historia.

Es una gran lástima que tantos europeos se hayan mantenido alejados de Iraq con una mezcla de supuesta superioridad moral y la schadenfreude antiamericana (la alegría por el mal ajeno). Una mayor aportación europea podría haber equilibrado el poder duro de la máquina militar de Estados Unidos con el poder blando de la experiencia de Europa con la diversidad y la aptitud para abordar las situaciones posteriores a las guerras.

En realidad, la ausencia de Europa no es únicamente una lástima, sino también una calamidad histórica. Los cohetes y los tanque por sí solos no pueden llevar la democracia; pero si la democracia va acompañada de la ayuda compasiva a los derrotados por parte de un poder civil, se puede adaptarla a Iraq y al resto de Oriente Medio.

Los límites de la democracia, Ralf Dahrendorf.

La Vanguardia, 1-III-06.

La elección del militante y hasta ahora extraparlamentario grupo Hamas en los territorios palestinos nos recuerda lo que la democracia no puede lograr. En un Estado democrático más asentado nadie se asombra de que su propio bando no gane. La democracia consiste en la competencia entre partidos y, a no ser que constituyan una gran coalición, no pueden ganar todos. Pero ¿y si los vencedores de una elección no tienen intención de respetar las normas que forman parte del proceso democrático?

Recordamos a Hitler, que, pese a que su partido consiguió poco menos del 50 por ciento de los votos, pudo basar su toma del poder en una mayoría parlamentaria. Más recientemente, las elecciones en los países poscomunistas de Europa han llevado al poder a grupos cuyas credenciales democráticas son dudosas, por no decir algo peor.

No pretendo comparar a Hamas con ninguna de esas fuerzas políticas. No obstante, debemos hacernos preguntas sobre un movimiento vencedor con no pocos de sus miembros electos presos en las cárceles israelíes y otros que probablemente no obtendrán el permiso para entrar en el país en el que fueron elegidos, por lo que el nuevo Parlamento no podrá funcionar adecuadamente.

Todo esto nos revela tres cosas sobre la democracia.

En primer lugar, las elecciones raras veces resuelven los problemas fundamentales. En particular, no crean un orden liberal. Para ser eficaces, las elecciones deben ir precedidas de un extenso periodo de debate y polémica. Tiene que haber una exposición de argumentos que se defiendan o se ataquen.

Las primeras elecciones, en particular, son casi inevitablemente de valor limitado como fundamentos de la democracia, porque se producen en una atmósfera cargada emocionalmente y en gran medida sin un debate sustancial. Son una invitación para afirmar quién es cada cual y a qué bando pertenece, en lugar de una competencia entre programas políticos amplios y bien formulados.

Eso significa, en segundo lugar, que las primeras elecciones y tal vez las elecciones más en general no son por sí solas una garantía suficiente de libertad. Como dice maravillosamente el juez del Tribunal Constitucional alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde, las democracias no pueden crear las condiciones para su supervivencia y su éxito.

¿Cuáles son esas condiciones y quién las crea? La respuesta a la primera pregunta es la siguiente: el Estado de derecho. Debe haber ciertas reglas aceptadas del juego político que obliguen a todos, de modo que quien no las acepte o no las respete quede descalificado.

Naturalmente, eso es más fácil de decir que de hacer. ¿Quién establece las reglas del juego? Hay una lógica evidente en el establecimiento de una convención constitucional

y después la celebración de elecciones conforme a las reglas acordadas. Es lo que ha ocurrido en Iraq, por ejemplo, pero también hay que elegir la convención constitucional y esa elección puede topar con las propias dificultades que caracterizan en alto grado a las primeras elecciones a los parlamentos de las nuevas democracias.

Una vez establecidas las reglas del juego, sigue siendo oportuna esta pregunta: ¿quién impone su cumplimiento? ¿Quién podría decir a Hamas que, a no ser que acepte ciertas reglas, su elección no es válida? Para ello hace falta un tribunal constitucional de algún tipo, además de un poder judicial e instituciones que puedan imponer el cumplimiento de sus resoluciones. En los estados y territorios soberanos no es demasiado probable que surjan por sí solos. No es casualidad que el proceso democrático haya aparecido sin apenas contratiempos en los casos en que había un poder exterior que respaldaba la Constitución.

La tercera enseñanza se desprende de estas consideraciones. La democracia, en el sentido de elecciones libres conforme a ciertas reglas no nos permite decir a los demás que ha prevalecido la causa de la libertad y que podemos desentendernos. Al contrario, la democracia es una tarea a largo plazo. Algunos dicen que se logra cuando un país ha pasado la prueba de dos traspasos de poder, es decir, dos cambios de gobierno sin violencia. Debemos sumar a ese criterio una cultura que haga de las elecciones una competencia auténtica de una pluralidad de respuestas a las cuestiones en juego.

Para los territorios palestinos, eso significa que las esperanzas puestas por la población en las elecciones probablemente fueran demasiado grandes. Por la misma razón, reducir las esperanzas significa que no se debe exagerar la importancia de los resultados. ¿Quién sabe? Todavía puede que el resultado sea un paso hacia un Estado eficaz que merezca el reconocimiento internacional. Entre tanto, la tarea principal es la de fomentar el Estado de derecho, respaldado por la comunidad internacional.
